



EL NACIONAL

Emergencia humanitaria compleja en Venezuela

Derecho a la alimentación (II)

Marianella Herrera*

La falta de nutrientes, calorías y proteínas entre la concepción y el final de los dos años de vida, representa una amenaza para el crecimiento y desarrollo físico, mental y social de las nuevas generaciones. Los datos presentados a continuación son resultado de la aplicación de una metodología interdisciplinaria que reunió a múltiples actores informados para compartir, contrastar y fundamentar datos sobre la situación del derecho a la alimentación en Venezuela

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2017, un total de 25 mil mujeres embarazadas no reciben control prenatal y 7 mil 500 se controlan tardíamente en el octavo y noveno mes de embarazo, lo cual pone en riesgo su vida y la de sus hijos en un contexto de emergencia alimentaria. En Venezuela es acentuada la carencia de servicios para la atención a la salud materno infantil. En consecuencia, es muy escasa la vigilancia de la salud nutricional de la madre y del niño, el control del embarazo y la provisión tanto de suplementos nutricionales como de fórmulas infantiles que complementan la alimentación, después de los seis meses, con y sin lactancia materna.

Entre los años 2013 y 2014, seis de cada diez embarazadas que asistían a control de la red ambulatoria del municipio Sucre en la ciudad de Caracas tenía malnutrición, bien por exceso o por déficit, y tanto el déficit como el exceso estuvieron asociados a inseguridad alimentaria en los hogares. En 2018, entre los seis y doce meses de edad, 41,8 % de los niños de sectores populares había dejado la lactancia materna. Esto representa un riesgo para la salud de los recién

nacidos debido a que, en un momento crítico como el que vive el país, el reforzamiento y promoción de lactancia sería fundamental para cubrir las necesidades tanto nutricionales como inmunológicas de los más pequeños.

La organización Camia (Casa de atención de las mujeres indígenas amazónicas) reportó que una de cada cuatro embarazadas atendidas tenía déficit de hierro y comenzaba a asistir a control del embarazo alrededor del cuarto mes, cuando ya la prevención de defectos del tubo neural no es posible.

En enero de 2018, Christophe Boulhierac, portavoz de Unicef, alertó sobre el rápido declive del bienestar nutricional de la población infantil en Venezuela por la prevalencia de malnutrición como consecuencia de la crisis económica del país y las limitaciones de acceso a servicios de salud, medicamentos y alimentos de calidad. Dado que las cifras oficiales no estaban disponibles, Unicef hizo un llamado para que en corto plazo se fortaleciera la vigilancia nutricional y se proporcionaran servicios de recuperación nutricional a través de sus socios.

UNA COMBINACIÓN DE FACTORES

La combinación de emergencias en alimentación y salud disminuye las probabilidades de que los niños más pequeños y las embarazadas que sufren de desnutrición severa tengan oportunidad de sobrevivir. El aumento de la mortalidad materna en 66 %, y de la mortalidad infantil en 30 % entre 2015 y 2016, según el último boletín publicado por el Ministerio de Salud, es

producto de emergencias concurrentes en el sistema alimentario y en el sistema sanitario público de salud, que combinadas disminuyen las probabilidades de sobrevivencia de embarazadas y recién nacidos al introducir la desnutrición en una situación de colapso de los servicios materno infantiles por falta de insumos, medicinas, personal, instalaciones y equipos operativos y adecuados, mucho más cuando en Venezuela el número de niñas y adolescentes embarazadas es muy alto.

Según informe de la Comisión de Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), sobre la situación de los derechos humanos de ese estado, en 2017 la Fundación Milagro de Amor reportó diecisiete muertes de niños por desnutrición, y la Fundación Ángeles Chiquinquireños registró el mismo año tres fallecimientos y seis más en 2018; al mismo tiempo que advirtió sobre el incremento de niños con desnutrición residenciados en municipios pobres periféricos de la ciudad de Maracaibo.

En el estado Mérida, también se reportaron mayores casos de muerte en 20 % de niños de uno a cuatro años con desnutrición atendidos en centros de salud del Estado.

LA VULNERABILIDAD DE LA INFANCIA

Un total de 33 % de los niños entre 0 y dos años de edad de sectores pobres tiene retardo de crecimiento según el indicador talla/edad; exponiéndolos a irremediables trastornos del desarrollo y enfermedades a futuro. De acuerdo con el estudio de la emergencia social de la Fundación



LA PATILLA



LA RAZÓN

Bengoa-UCAB, 33 % de los niños entre cero y dos años de edad de bajos recursos económicos (estratos C, D, E y F) presentan retardo en el crecimiento en talla (RCT) o desnutrición crónica. La desnutrición crónica manifestada por RCT es un signo de que la alteración del crecimiento ocurrió desde la etapa prenatal, e incluso durante el embarazo, por la exposición de los padres a las deficiencias alimentarias y nutricionales del entorno. El hecho de no tomar las medidas de asistencia nutricional adecuadas para mitigar los daños físicos y mentales antes de los dos años de vida, conlleva el riesgo de que este 33 % de niños pueda presentar en sus procesos de crecimiento: retardos del desarrollo cognitivo, trastornos en el desarrollo psicomotor, peligros a futuro de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad y algunos tipos de cáncer. Existe suficiente evidencia acerca de la importancia de buenas condiciones nutricionales desde el comienzo de la vida y su influencia determinante en la salud de las personas. Los daños del déficit nutricional en etapas cruciales del crecimiento tales como el embarazo y los primeros 36 meses de vida están asociados al incremento de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas, retardo cognitivo, daños en el sistema nervioso, trastornos gastrointestinales e incluso la muerte temprana.

MEDIDAS DESESPERADAS

Ante las políticas de privación y dependencia, que incluye la negativa a reconocer la emergencia y no publicar cifras oficiales, las familias se han visto forzadas a adoptar estrategias de sobrevivencia, incluyendo emigrar.

a. Las políticas de gobierno que han generado privación económica y dependencia alimentaria con fines coercitivos y discriminatorios, han obligado a que la población más pobre adopte estrategias de sobrevivencia o emigre del país. De acuerdo con el VII Boletín de Cáritas, los hogares evaluados en el Sistema de Alerta, Monitoreo y Atención en Nutrición y Salud (SAMAN) adoptaron entre otras estrate-

gias de sobrevivencia: recurrir a lugares no convencionales donde puedan encontrar alimentos en 53 % (pedir en la calle o buscar en la deposición de residuos), reducir la calidad de las comidas en 72 % o privarse de comidas en 63 %, vender parte de sus bienes o endeudarse para poder comer en 39 %, desincorporar a uno de los miembros del hogar en 36 %. Ante esta situación de extrema necesidad, los hogares más pobres se han visto forzados a la emigración de alguno de sus miembros en condiciones muy precarias, dejando a otros en la casa, generalmente los que presentan mayor vulnerabilidad.

b. En marzo de 2018, David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (WFP), luego de una visita a la frontera entre Colombia y Venezuela calificó el éxodo venezolano como una crisis humanitaria de características catastróficas. En enero de 2018, un estudio de la empresa Datos indicó que 63 % de los venezolanos tenía algún familiar en el extranjero, lo cual significa que las remesas del exterior constituyen un medio para la subsistencia de los miembros que permanecen en el país. El estudio realizado por Codhez en el municipio Maracaibo del estado Zulia, encontró que en uno de cada dos hogares había migrado algún miembro, enviando remesas destinadas principalmente a la compra de alimentos.

UNA AMENAZA LATENTE

En el informe de alerta temprana sobre seguridad alimentaria y agricultura de la FAO de abril-junio de 2018, Venezuela fue uno de los ocho países del mundo de alto riesgo por la gravedad y magnitud de los impactos económicos y políticos sobre el empeoramiento de la inseguridad alimentaria y de una crisis migratoria, pudiendo alcanzar niveles de inestabilidad sistémica¹. En conclusión, los daños reportados debido a la violación del derecho humano a la alimentación son graves, extensos y continúan sin ser atendidos de acuerdo a su escala y severidad. Los reportes de casos con desnutrición, tanto aguda, como crónica y severa, siguen llevando a la población afectada a la muerte o a inexorables discapacidades que tendrán que ser atendidas en el futuro.

*Experta en alimentación y nutrición.

NOTAS

- 1 Para conocer el Reporte original y conocer las referencias consultadas, visitar el siguiente enlace: <http://www.civilisac.org/emergencia-humanitaria-compleja/reporte-nacional-emergencia-humanitaria-en-venezuela-en-el-derecho-a-la-alimentacion>